

Título de la ponencia: Las organizaciones de la sociedad civil y el desarrollo de experiencias de economía social: alcances y limitaciones en la ciudad de Tandil en las últimas décadas

Autor/es: Silvia Fernández Soto, Jorge Tripiana

Dirección de correo electrónico: silviafernandezsoto@speedy.com.ar

Pertenencia institucional: Programa de Investigación y Estudio sobre Política y Sociedad, Universidad Nacional del Centro, Argentina.

PRESENTACIÓN:

En este trabajo se indagará sobre experiencias de economía social en el ámbito local municipal observando sus potencialidades y limitaciones en las décadas del noventa y dos mil, observando en un contexto de crisis diferentes modalidades de articulación con el Estado. Trabajaremos con los datos de un estudio empírico del universo de las organizaciones de la sociedad civil en la ciudad de Tandil (interior de la Provincia de Buenos Aires). Centraremos la atención en las organizaciones que en la década del noventa y dos mil definieron en sus campos de intervención emprendimientos socio-productivos. Indagaremos el perfil que adquieren en un contexto socio-histórico específico, observando la identidad que van fundando en la trama de relaciones sociales en que se insertan, particularizando las relaciones que van construyendo con el Estado a través de las mediaciones institucionales que implican las políticas sociales que se definen para el sector.

En este trabajo tomamos como fuente los Censos de organizaciones de la sociedad civil que realizamos en el 2002/04 y en el 2007/08 en la ciudad de Tandil. Este trabajo implicó a través de un dispositivo metodológico censal el relevamiento de 257 organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Tandil, construyendo una base de datos primarios únicos y socialmente relevantes, desde una perspectiva sincrónica y diacrónica. Se completa esta fuente primaria con estadísticas oficiales y documentación oficial del Municipio de Tandil.

1- TANDIL: PRECARIZACIÓN, DESOCUPACIÓN Y PLANES DE EMPLEO.

1. La ciudad de Tandil se caracteriza por ser una ciudad intermedia¹ con un crecimiento poblacional constante, conformando un centro urbano dinámico. Con relación a esto,

¹ Se considera en la Argentina *ciudades de tamaño intermedio* a aquellas que cuentan entre 50.000 y 500.000 habitantes.

desde la década del 40 hasta la actualidad ha experimentado un aumento poblacional persistente, siendo la población que reside en la zona urbana el componente ascendente de este dinamismo, mientras que la población rural ha ido decreciendo paulatinamente. Al igual que lo que ocurre en el conjunto de la provincia de Buenos Aires, desde mediados de siglo XX se manifiesta un crecimiento de la población con residencia en la ciudad de Tandil, y un descenso de la población rural. Este descenso es constante durante todo el período considerado, y guarda relación estrecha con la reducción en la cantidad de unidades productivas en el agro del partido.

El movimiento poblacional al interior y hacia el Partido de Tandil, que ha tenido como consecuencia que la ciudad de Tandil se convierta en una de las más importantes de la Provincia, tiene su razón de ser en las particularidades que ha asumido la estructura productiva en su desarrollo histórico, desarrollando un perfil donde se combina lo industrial con lo agroganadero.

Siguiendo en esto un cambio estructural del capitalismo argentino, que tiene lugar básicamente por las transformaciones a las que induce la crisis mundial de 1930, el surgimiento de industrias sustitutivas de importaciones comienza a perfilar una situación que permite el crecimiento de muchos centros urbanos alrededor de nuevas industrias. Así, la ciudad de Tandil en la segunda mitad del siglo XX combinó una importante producción agrícola-ganadera con una extensa producción industrial, lo que le ha dado a la ciudad un perfil industrial característico en un contexto como el de la región pampeana, una de las zonas de tierra más ricas del país. Hacia fines del siglo XX las transformaciones generales en el funcionamiento del capitalismo en nuestro país, cuyo origen puede fecharse a ciencia cierta hacia mediados de la década del setenta, han dado lugar a tendencias de cambio estructural que, para la ciudad de Tandil, erosiona en forma importante este perfil industrial al otorgarle un predominio a otras ramas de actividad. El imaginario de la ciudad como “de industrias”, si bien persiste lo hace ahora subordinado a la idea de “Tandil, ciudad de turismo”, lo cual simboliza de alguna manera el cambio en su estructura productiva. Mostraremos a continuación indicadores de esta transformación.

Distribución de la población de 14 años y más ocupada por categoría ocupacional.

Partido de Tandil: 1980, 1991, 2001, 2005, 2006.

Categoría ocupacional	1980		1991		2001		2005*	2006*
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	%	%
Obrero o empleado	22 514	66,9	25 384	63,0	23 571	64,5	70	69,3
Patrón o socio	3 052	9,1	4 186	10,4	3 362	9,2	8,1	6,9
Trabajador por cuenta propia	7 112	21,1	8 858	22,0	8 187	22,4	20,2	22,3
Tr. familiar sin remuneración fija	962	2,9	1 862	4,6	1 425	3,9	1,7	1,6
Ignorado	-	-	28	0,1	-	-		
Total PEA ocupada	33 640	100	40 318	100	36 545	100		
TOTAL PEA	33 734		42 501		48 976			

* No se cuenta con los datos absolutos.

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1980, 1991, 2001. EHE Dirección de Estadística Pcia de Buenos Aires, 2005, 2006.

De los datos se desprenden los siguientes procesos: en primer lugar, el crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA), que aumenta un 20,6% entre 1980 y 1991, y un 15,23% entre 1991 y el 2001. No se cuenta con los datos para los últimos años, pero es probable que esta tendencia se mantenga, dado que se verifica en distintas unidades de análisis. Esto implica que la Tasa de Actividad mantenga un ritmo de crecimiento importante: 36,7% para el año 1980; 42% en 1991; 45,3% en el 2001, 47,4% en el 2005 y 48,4% en el 2006.

Este es un dato importante en el análisis, porque se relaciona con lo que también se observa claramente en el cuadro: aumento del volumen absoluto y del peso relativo de los obreros, mientras que descienden los patrones, se mantienen relativamente estables los trabajadores por cuenta propia, y los trabajadores familiares van perdiendo peso progresivamente.

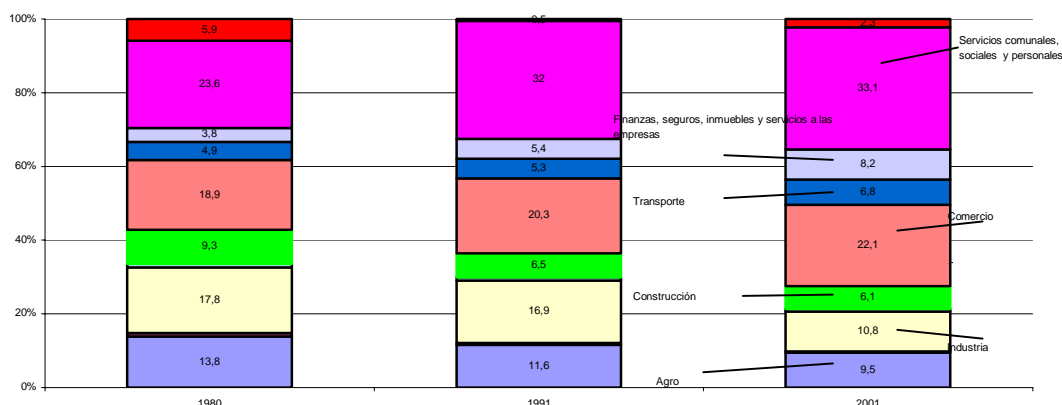
Esta masa de alrededor del 70% de asalariados registra un porcentaje de desocupados del 6% en el registro más reciente, 2006, habiendo sido del 25,4% en el año 2001 y del orden del 5,4% en 1991. Es decir que se muestra un pico hacia fines de la década del noventa y comienzos del 2000, en donde se llega a cuadruplicar los valores históricos, y se vuelve a una situación similar, de alrededor del 6% de la PEA en condición de desocupados. Sin embargo, esta similitud es aparente porque se ha producido una importante transformación en la composición de los trabajadores.

Lo primero a considerar es que las mismas categorías censales muestran deficiencias al momento de incluir a la población con el fin de dar cuenta de un volumen real. En primera instancia, la condición de asalariado contiene situaciones bien diferenciadas, en donde gerentes y administradores de empresas industriales y financieras se mezclan con los obreros no calificados. De todas maneras, la gran masa de asalariados son obreros, es decir no propietarios de sus condiciones materiales de existencia, proletarios. Es más preocupante la noción de Trabajador por cuenta propia, que encubre realmente una gran parte de trabajadores precarios sin ningún tipo de relación formal ni capital propio. En segunda instancia, las condiciones en las cuales se realiza la venta de la fuerza de trabajo para esta masa creciente de obreros han cambiado, para peor. Con un 25% de la PEA sin empleo las condiciones de trabajo y los salarios para los obreros ocupados han empeorado.

Los procesos que se desarrollan en la economía real refieren a: cambio en la centralidad de las ramas de la actividad económica; b-concentración de la producción; c-repulsión de trabajadores de los espacios sociales que ocupaban; y d- precarización de las condiciones en las cuales se da la venta de la fuerza de trabajo. Estas tendencias son similares a las que pueden observarse a nivel más general –la nación o la provincia de Buenos Aires- entre las mismas fechas censales, lo cual puede analizarse teniendo como marco las profundas transformaciones observadas en la estructura productiva del Partido. En el cuadro siguiente podemos observar como se distribuye el total de población económicamente activa ocupada en las distintas ramas de la actividad económica en el partido en el período 1980-2001.²

² Trabajaremos en esta parte casi en forma exclusiva sobre la información de los Censos de Población y Vivienda, el último de los cuales fue relevado en el año 2001. Consideramos que son suficientes para mostrar los aspectos tendenciales de las transformaciones a las cuales hacemos referencia y que nos interesan especialmente para contextualizar nuestro trabajo sobre la economía social. De todas maneras, en la medida de que exista, se incorporará información de otras fuentes que complete la de los censos.

Distribución de la población por ramas económicas. Partido de Tandil 1980-2001



Se verifica con claridad el cambio de centralidad de las ramas, atendiendo a la población que ocupa cada una de ellas. Bajo la lógica del capital se combinan los procesos de terciarización de la economía y tercerización de los procesos de trabajo, lo cual, junto con la incorporación de innovaciones tecnológica, da como consecuencia un cambio de centralidad de las ramas de la actividad económica, miradas desde la cantidad de población que involucran. En términos generales, disminuye el protagonismo de las ramas de la producción (industria y agro, centralmente; construcción) y aumenta considerablemente la participación de las ramas económicas de circulación de bienes y de servicios.³

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Hogares y Empleo, para el año 2005 un 5,2% de la PEA ocupada realiza actividades en el agro; un 10,1% lo hace en la industria, y un 10,5% en construcción, lo cual estaría mostrando la agudización de la tendencia en lo que hace a las ramas industria y agro, y el crecimiento de la actividad en la rama de la construcción. Los datos más actuales sobre el panorama industrial del Partido están señalando una situación de profundización de la tendencia en la rama industria manufacturera. Los datos nos indican la profundidad de los cambios, en la última década se reducen el 40 % de los establecimientos industriales, y un 50% los obreros ocupados en los mismos. El promedio de personas ocupadas por establecimiento pasa de 15,4 en 1974 a 6 en el 2002.

³ Las ramas de la actividad económica son: 1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca; 2-Minas y canteras; 3-Industria manufacturera; 4-Electricidad, gas y agua; 5-Construcción; 6-Comercio; 7-Transporte; 8-Finanzas, seguros, inmuebles y servicios a las empresas; 9-Servicios comunales, sociales y personales; 10-Actividades no bien especificadas.

El proceso de repulsión de obreros se inicia a mediados de los setenta, sobre todo de los establecimientos que mayor cantidad de mano de obra ocupaban. Este proceso es simultáneo a la disminución del producto industrial, el cual cae hasta comienzos de la década del 80, manteniéndose luego en valores que alcanzan aproximadamente la mitad de los anteriores a 1976, para volver a caer en el registro de 2002⁴.

Por otro lado, se verifican en el Partido profundas transformaciones en el sector primario. El ininterrumpido descenso del volumen de población rural entre 1960 y 2001, descenso que es más acentuado entre 1960 y 1980, se acompaña del también constante descenso en la cantidad de población que realiza actividades económicas en el agro hasta el registro de 1980, y la relativa estabilidad - en realidad, leve aumento- entre esta última fecha y 1991, para luego perder un 26% de su volumen entre 1991 y 2001. Este importante descenso que indican los censos para la década del noventa es acompañado por la disminución de unidades productivas: las 1095 unidades que registra el censo agropecuario de 1988 se reducen a 659 para el año 2002. En este caso, aumenta el tamaño de las unidades productivas, crece el producto del sector y disminuye el volumen de la fuerza de trabajo, con lo cual claramente la tendencia es la concentración de la producción.⁵

En suma, al cambio en la centralidad de las ramas de la actividad económica que se verifica en el partido, se agregan procesos específicos de reducción de unidades productivas y de repulsión de trabajadores en ramas económicas que habían sido centrales para el partido a lo largo del siglo XX. La década del noventa resulta un punto de inflexión en este sentido, si bien algunos de estos procesos deben ser ubicados hacia mediados de la década del setenta, de acuerdo a la actividad de que se trate. En los noventa se disocia el aumento de la PEA de la tasa de empleo, lo cual muestra el cambio en la composición del volumen de los trabajadores, y la existencia de distintos

⁴ Los datos que arroja el “Relevamiento Industrial del Partido de Tandil” desarrollado durante el 2002 indican que “entre 1994 y 2002 el número de establecimientos productivos disminuyó en un 30 % y la cantidad de trabajadores en el sector industrial se redujo a la mitad. También el producto bruto sufrió un progresivo descenso. A su vez las exigencias para aumentar el ritmo productivo de los trabajadores no estuvieron sustentadas sobre incrementos de la producción y el empleo, sino sobre una marcada involución productiva y una significativa contracción de la ocupación”. Boletín de la UNCPBA, N° 9, 2003. Creemos que en estos resultados se cruzan tendencias de más largo plazo con la coyuntura específica; tal vez el efecto más evidente de la coyuntura sea la caída en el volumen de la producción, cuando la tendencia en distintas ramas es a la concentración de la producción y por ende al aumento del volumen productivo.

⁵ Sobre este proceso en el agro del Partido, ver: Jorge Tripiana.: El capitalismo en el campo. Aproximación a la medición de las fuerzas productivas y los grupos sociales a partir de datos censales. El partido de Tandil, 1937-1988. Tesis de Maestría en Investigación en Ciencias en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2004. mimeo.

procesos de repulsión de población de los espacios sociales que ocupaba. En el punto siguiente mostraremos determinados indicadores de la precarización de la situación de la población trabajadora que explican las características centrales que adquieren las prácticas de la economía social llevada adelante por los sectores populares en la ciudad.

2. LA PRECARIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA.

En términos generales, son dos los procesos más visibles respecto a la composición de la población trabajadora en las últimas décadas: en primer lugar, la conformación de un volumen importante de desempleados, que como vimos asciende a un cuarto de la PEA para el año 2001 para luego descender aproximándose a los valores de inicio de la serie en 1980; y por otro, de más largo plazo, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.

Respecto de la composición por sexo de la PEA, tenemos que si para 1980 los varones representan un 73% del total de la PEA, para el año 1991 significan el 64,5%, y para el año 2001 este porcentaje se ha reducido al 58,5%. Distintos procesos confluyen en este resultado, pero el cambio de centralidad de las ramas de la actividad económica es uno de ellos sin duda, a lo cual se agregan los efectos de la pauperización de la población por la disminución de los ingresos familiares. Por otro lado, en el volumen total de desocupados registrados en el año 2001, que asciende a 12.431 personas, las mujeres son 6.366, el 51,2%.

PEA según sexo. 2001

Sexo	Población de 14 años o más	Población económicamente activa						
		Ocupada				Desocupada		
		Total	Sólo trabaja	Trabaja y estudia	Trabaja y percibe jubilación o pensión	Sólo busca trabajo	Busca trabajo y estudia	Busca trabajo y es jubilado/estudia
Varones	39.911	28.638	20.333	1.291	949	4.647	1.066	352
Mujeres	43.977	20.338	11.706	1.333	933	4.703	1.267	396
Total	83.888	48.976	32.039	2.624	1.882	9.350	2.333	748

Fuente: CNPyV 2001, Indec.

El mayor volumen de desempleados se da en la franja de edad que va de los 20 a los 24 años, son 2.382 personas que significan el 19,2% del total desocupado; a su vez, significan el 38,9% respecto del total de la franja etárea en la PEA. El segundo mayor

volumen de desocupados tiene entre 15 y 19 años, significando el 12,9 % del total de desocupados, y alcanzando el 60,9% del volumen de PEA en esa franja etárea.

Como se puede observar en el cuadro, la franja de edades que van desde los 15 a los 34 años resultan las más importantes en el volumen total de desocupados. En conjunto estas franjas etáreas corresponden al 52,5% del total de desocupados en el partido para el año 2001. Para el año 2006 esta situación sigue siendo similar: la tasa de actividad de los valores de hasta 29 años es del 38,2%, y el de las mujeres de la misma edad es del 28,9%. El registro del año anterior indicaba 34,9% y 25%, para hombres mujeres respectivamente.

Estos porcentajes, aún considerando el alza entre el 2005 y el 2006, están muy por debajo de la población componente de la PEA que tiene 30 años o más (el rango considerado es 30-64 años): para los varones es del 93,9% en el 2006 (era el 92% en el 2005); y para las mujeres es 65,8% en el 2006 (65,5% era en el 2005).

Por otro lado, el universo de trabajadores ocupados se compone de distintas situaciones. Las transformaciones en materia de legislación laboral (contratación temporal, abaratamiento del despido, reducción de aportes patronales a la seguridad social y restricciones a la negociación salarial) ocurridas en los años noventa han tenido como consecuencia la ampliación del volumen de trabajadores en condiciones precarias. La justificación para estas políticas era que la legislación laboral tenía un carácter altamente protector, y de ahí se pasa a fomentar las reformas para que sea el mercado quien regule la forma en que se lleva adelante la venta de la fuerza de trabajo⁶, lo cual ha tenido como consecuencia el deterioro en la situación de la realización del trabajo en nuestra sociedad.

Entenderemos como precario el empleo que se da a través de relaciones laborales que no cumplen con las normas vigentes en el país. Es indudablemente un concepto histórico, y para el momento actual de la relación capital-trabajo, entendemos que las situaciones de precariedad son diversas. A través de las estadísticas que releva el INDEC, abarca aquellas situaciones en las cuales el trabajador no tiene beneficios sociales, o se encuentran subocupados y demandan otro empleo, jóvenes y mujeres con inserción laboral inestable, cuentapropistas con dificultades para continuar su actividad, changuistas, servicio doméstico y beneficiarios de planes de empleo. Para el caso de

⁶ Banco Interamericano de Desarrollo (BID): *América Latina frente a la desigualdad. Progreso Económico y Social en América Latina, Informe 1998-1999, Washington D.C, 1998.*

Tandil⁷, en relación a los aportes jubilatorios, tenemos la siguiente situación para el año 2001 para el total de la PEA:

Categorías	Casos	%
Le descuentan	15.911	43,54 %
Aporta	5.759	15,76 %
No le descuentan ni aporta	14.092	38,56 %
No recibe sueldo	783	2,14 %
Total	36.545	100,00 %

Un 40,7% de la población económicamente activa ocupada ni aporta ni se le realiza ningún descuento para la jubilación. En el cuadro siguiente se desglosan los totales para cada situación de acuerdo a la categoría ocupacional de la población:

	Le descuentan		Aporta		No le descuentan ni aporta		No recibe sueldo		TOTALES	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Obreros	15.820	65,87	374	1,56	7.823	32,57	-	-	24.017	100
TCP	-	-	3.055	38,96	4.786	61,04	-	-	7.841	100
Patrones	-	-	2.287	67,98	1.077	32,02	-	-	3.364	100
Familiares	91	6,88	43	3,25	406	30,69	783	59,18	1.323	100
TOTALES	15.911	43,5	5.759	15,8	14.092	38,6	783	2,1	36.545	100

Los resultados son similares a los vistos para el conjunto de la provincia, aunque en Tandil es mayor el peso relativo de los obreros precarizados (32,57 contra el 29,07%) y es menor el de los cuenta propia (61,04 frente al 65,39%). Al 38,6% de la PEA ocupada, unas 14.092 personas, no se le hace descuento por jubilación ni aporta a la misma. Este volumen se compone principalmente por el aporte al mismo de los TCP, quienes se encuentran en esta situación laboral en un 61,04% del total de trabajadores por cuenta propia. En las otras categorías –obrerros, patrones y familiares- esta situación de precariedad se da en algo más del 30% de cada una de ellas. Es interesante mostrar también que los obreros y empleados se diferencian en relación a la seguridad social de acuerdo a si es el sector público o el privado donde se emplean:

⁷ En un trabajo previo hemos realizado la comparación entre la situación en Tandil, con la totalidad de la Provincia y la unidad Resto de la Pcia de Buenos Aires. Ver: "Caracterización y tendencias de la población trabajadora: precarización, desocupación y planes de empleo. El caso de la ciudad de Tandil en las décadas de 1990 y 2000". 8° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Agosto 2007. ISBN 978-987-98870-3-5.

	Le descuentan		Aporta		No le descuentan ni aporta		TOTAL	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Sector público	6.497	89,38	32	0,44	740	10,18	7.269	100
Sector privado	9.323	55,67	342	2,04	7.083	42,29	16.748	100

El 30,3% de los obreros o empleados en el partido de Tandil lo hacen en el Estado; un 10,2% de ellos no tienen descuentos por jubilación ni aporta en forma particular. Los obreros del sector privado son el 70% del total de obreros ocupados, de los cuales el 42,3% no tienen descuentos ni aportan. En conjunto, los asalariados sin aportes jubilatorio constituyen un volumen de 7.823 personas, un 32,6% de la categoría.

Respecto a la obra social o plan médico, el 35,15% de la PEA ocupada no tiene cobertura. En este total que no tiene obra social, la mitad son obreros, y un tercio corresponde a la categoría cuenta propia. Dentro de cada categoría, observamos que los TCP muestran la situación de mayor incidencia de situaciones sin cobertura (un 55,15%). La incidencia en los TF llega al 43,30%. En el caso de los obreros del sector privado representa un 36,12% mientras que para los obreros del sector público alcanza un 10,01%.

	Obra social/Plan médico				TOTALES
	Tiene		No tiene		
	Nº	%	Nº	%	
Obreros sector privado	10.698	63,87	6.050	36,12	16.748
Obreros sector público	6.536	89,91	733	10,01	7.269
Patrón	2.198	65,33	1.166	34,66	3.364
TCP	3.516	44,84	4.325	55,15	7.841
TF	750	56,70	573	43,30	1.323
TOTAL	23.698	64,84	12.847	35,15	36.545

Al volumen de 12.847 personas ocupadas sin cobertura de obra social o plan médico se le debe agregar el total de desocupados: 12.431, lo cual suma un volumen total de 25.278, lo cual significa un 51,61% de la PEA. Si tomamos en consideración la población total, unas 42.540 personas no tienen cobertura de obra social o plan médico, el 39,35%. En relación al registro del año 1991, en donde la cantidad de personas del total sin cobertura de obra social o plan médico es de 31.627, un 31,24%, tenemos un aumento de 8,11 puntos.

Los datos censales no nos permiten indagar en relación a la subocupación y sobreocupación, pero si nos permiten afirmar que se da un aumento de la privación de

la protección social para el conjunto de la PEA y en particular para la población trabajadora, lo cual se puede comprobar con indicadores más recientes: la EHE de la Pcia de Buenos registra para Tandil en el 2006 la existencia de un 46,4% de asalariados que no tienen ningún beneficio social; la situación de cada beneficio social se puede ver en el siguiente cuadro:

Porcentaje de población asalariada según percepción de beneficios sociales. Tandil, 2006.

Beneficio	% de población
Indemnización por despido	36,4
Vacaciones pagas	50
Aguinaldo	50,8
Descuentos jubilatorios	49,4
Obra social	50,2
Ningún beneficio	46,4

Como se puede apreciar, es un volumen de población muy grande, de más o menos la mitad del volumen total de asalariados considerando cualquier beneficio social. La excepción es la población sin derecho a una indemnización por despido: es el 63,6% de los asalariados. Sólo para ver la evolución, si consideramos los valores tomados del censo del 2001 para la población sin aporte jubilatorio o sin descuento, que era del 32,6%, este volumen ha aumentado al 50,6%. Por último, también resulta significativo que la PEA tenga una composición del 50% de la población con un nivel educativo de primaria incompleta (7,5%), completa (21,8%) y secundario incompleta (20,3%)⁸.

Para resumir, hemos mostrado las transformaciones en la población económicamente activa, sobre todo en los asalariados, que son el 70% de la misma. Los distintos indicadores analizados dan cuenta de la precarización de la fuerza laboral, del empeoramiento de las condiciones de la venta de la fuerza de trabajo.

3- LA MULTIPLICACIÓN DE PLANES DE EMPLEO: LA EXPERIENCIA RECIENTE EN EL ÁMBITO LOCAL.

El problema de la implementación, por parte del Municipio de Tandil, de diversas políticas de empleo con origen en diferentes niveles gubernamentales, se presenta como significativo en el escenario posterior a la crisis recesiva de fines de la década del 90 e

⁸ Encuesta de Hogares y Empleo. Dirección de Estadística de la Provincia de Buenos Aires, 2006.

inicios del 2000. En este contexto de agudización de la desocupación, la instancia municipal se constituye en un eslabón ejecutor y también planificador de una diversidad de planes de empleo. Se despliegan distintas estrategias que configuran una trama compleja intergubernamental de planes de empleo bajo una modalidad de políticas activas para las personas sin trabajo, vinculada de diferentes maneras a diversas organizaciones de la sociedad civil. En tal sentido nos interesa caracterizar en un municipio, la respuesta Estatal al problema, materializada a través de diversos planes y programas de empleo, que para su ejecución apelan a la “participación” de las organizaciones de la sociedad civil.

Dentro de estos programas de empleo que configuran las políticas activas de empleo podemos diferenciar aquellas que se dirigen a la inserción directa de los desocupados en empresas privadas, y por otro lado aquellas de carácter transitorio que se dirigen a desarrollar los procesos de contraprestación en el ámbito público estatal y no gubernamental. Bajo la administración del presidente Kirchner a partir del año 2003, se empiezan a generar un conjunto de programas dirigidos a ocupar a desocupados y reconvertir beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD), a través de actividades de autoempleo bajo la modalidad de micro-emprendimientos. En efecto, en el esquema de los nuevos lineamientos de política social, se pretende constituir a los “beneficiarios” en “emprendedores”, principalmente a través del Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” el cual persigue la generación de empleos “genuinos”. Tales emprendimientos suelen ser pequeños comercios o talleres en los que se elaboran productos para comercializar localmente. Sin embargo, la responsabilidad por la generación de las iniciativas y los empleos reposa mayoritariamente en los propios “emprendedores sociales”, quienes deben concebir las propuestas y gestionar los recursos recibidos.

Para ordenar los distintos planes de empleo en ejecución que configuran la respuesta estatal en el ámbito local, seleccionamos un conjunto de dimensiones analíticas que apuntan a comprender en proceso la dinámica que se concretiza en esta esfera. Estas dimensiones representan constructos teórico-metodológicos sintéticos que permiten evaluar para el caso en estudio las redefiniciones en las formas de intervención del Estado en un campo social específico, en un momento de transformaciones estructurales generales regresivas que fuimos señalando.

En este sentido construimos una matriz de datos que organiza información correspondiente a la Municipalidad de Tandil. Los ítems analíticos que organizan la matriz posibilitan llevar a cabo un estudio comparativo entre los diferentes programas de empleo, captando por una parte la diversidad constitutiva de los mismos, sus lógicas planificadoras, sus marcos institucionales, objetivos y estrategias de acción. Observando de conjunto y en proceso los rasgos centrales de la intervención estatal en relación a la desocupación a través de diferentes modalidades de planes.

Para este fin, las principales dimensiones seleccionadas son las siguientes⁹: denominación de los programas; la emergencia y los objetivos de los mismos y las entidades involucradas en su instrumentación; la definición de los destinatarios y criterios de selectividad; la inserción institucional de estos programas y sus diversas formas organizativas; la relación Estado-sociedad civil en las iniciativas de intervención que despliegan; los bienes y servicios que implican; las fuentes de financiamiento que garantizan la continuidad de los servicios; el grado de participación de los usuarios y agentes comunitarios en estas políticas.

A continuación veremos la situación de los planes sociales que se encuentran bajo la supervisión municipal. El siguiente cuadro nos muestra los distintos planes sociales existentes en el municipio de Tandil desde el año 2000 hasta la actualidad, y características generales de cada uno, en función de los distintos indicadores definidos.

Políticas de empleo asociadas a la desocupación. Tandil en la década del 2000¹⁰

Nombre del Programa/ Proyecto en marcha	Inicio	Objetivos/Destinatarios	Bien o servicio que presta/carga horaria	Frecuencia de la entrega/ Plazo	Origen de los recursos
PROMET Programa Municipal de Empleo Transitorio	2001	“Brindar ocupación transitoria a desocupados y mujeres jefas de hogar.”	\$200. 40 a 120 hs mensuales	Mensual (período no inferior a tres meses)	Municipio

⁹ Se utilizan las dimensiones de análisis utilizadas en el trabajo de estudio de las políticas alimentarias a nivel local. Véase Fernández Soto Silvia (2006) “Estado y organizaciones de la sociedad civil: intervenciones en relación a la pobreza. Un estudio de caso en una ciudad intermedia del interior de la provincia de Buenos Aires”, presentado en el Coloquio internacional *LOS PROCESOS DE CO-CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES: Economía social, lucha contra la pobreza y políticas de empleo*. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, diciembre de 2006.

¹⁰ No se incorpora en la tabla las microempresas que a través del municipio han realizado una operatoria crediticia. La mayoría de estas microempresas son de carácter familiar con un proceso de comercialización reducido a nivel local.

SECOM Subprograma Municipal Servicios Comunitarios	2001	"Brindar ocupación transitoria y aprendizaje a los beneficiarios/as a quienes se les haya otorgado subsidios, alojamiento u otro beneficio de asistencia social".	Apoyo económico no remunerativo hasta \$200; 40 a 120 horas mensuales	Mensual (período no superior a tres meses; renovable a través de Acción Social)	Municipio
Programa BONUS	2000	"Facilitar ingreso al mercado laboral regular de jóvenes de ambos sexos, de entre 18 y 25 años de edad, desocupados, con o sin experiencia laboral"	Beca de \$100. 4 horas diarias o 20 semanales.	Mensual (con un plazo máximo de 12 meses)	Provincia
Plan BARRIOS BONAERENSES	2000	"Dirigido a un integrante de cada grupo familiar sin ingresos", para desempeñar proyectos productivos, servicios, capacitaciones u obras menores	Subvención no remunerativa, de \$120 hasta \$350. Hasta 5 hs diarias o 25 semanales.	Mensual (no podrá exceder el término de 3 meses, pudiendo ser renovado)	Provincia
Programa SEGUNDA OPORTUNIDAD	2000	"Destinado a facilitar la reinserción laboral al mercado laboral regular de los jefes de familia, de ambos sexos, de entre 45 y 55 años de edad, que hayan sido despedidos durante el último año"	Colaboración económica \$150. Beca de carácter no remunerativo. 4 hs diarias o 20 semanales	Mensual (por un plazo máximo de 12 meses)	Provincia
P.E.C. (Programa de Empleo Comunitario)	2002	"...ayuda económica a aquellos jefes de hogar desocupados, con hijos menores de 18 años de edad o discapacitados de cualquier edad, o cuyos cónyuges, concubinas o cohabitantes estuvieran en estado de gravidez y fueran también desempleados"	Transferencia de ingresos que va de \$100 a \$200. 20 hs semanales	Mensual (período de 3 meses, renovable)	Nación
PJHD (Plan Jefes/as de Hogar Desocupados)	2002	Jefes/as de hogar con hijos de hasta 18 años de edad, o discapacitados de cualquier edad, y a hogares en los que la jefa de hogar o cónyuge, concubina o cohabitante del jefe de hogar se hallare en estado de gravidez, todos ellos desocupados",	Ingreso no remunerativo de \$150. 4 a 6 horas diarias o 20 semanales.	Mensual (renovable anualmente)	Nación
Plan Manos a la Obra	2003	Emprendimientos productivos asociativos comerciales. Tres o más personas desocupadas, subocupadas o beneficiarios de planes Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.	Herramientas e insumos	Unica vez.	Nación

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Área de Empleo de la Municipalidad de Tandil.

No vamos a desarrollar una desagregación de las planificaciones de cada programa porque no es objeto de este trabajo. Pretendemos indicar los trazos más significativos que se desprenden de la lectura de la matriz de datos presentada.

a) El municipio de Tandil está desarrollando ocho programas de empleo en relación a la desocupación, los cuales 2 corresponden a la órbita municipal, 3 a la órbita provincial y 3 son del nivel nacional. Esto supone una trama compleja de articulación de diferentes dependencias y niveles gubernamentales y diferentes actores sociales.

b) De los ocho programas: dos (de carácter provincial) apuntan a la inserción regular en la empresa privada, los cuales adquieren cuantitativamente un carácter marginal; dos (uno provincial y otro nacional) a la constitución del autoempleo a través de los microemprendimientos; y cuatro (dos municipales, y dos nacionales) asumen un carácter no remunerativo, transitorio, asociado a la obligatoriedad de la contraprestación.

c) Al mismo tiempo el municipio aporta recursos humanos municipales para garantizar la operatoria de los programas, y destina recursos financieros para sostener los dos programas de origen municipal.

d) Si bien en algunos programas es posible observar una recreación local, las orientaciones y planificaciones generales obedecen a las instancias provincial y nacional.

e) El sujeto destinatario de las diferentes modalidades corresponde a los desocupados/as jefes/as de hogar, sectores pobres asistidos, jóvenes de entre 18 y 25 años desocupados, integrantes de familias numerosas sin ingresos, jefes de familias de entre 45 y 55 años que hayan sido despedidos el último año. De aquí se derivan los criterios de selectividad de los programas, los cuales apuntan centralmente a desocupados jefes de hogar sin experiencia laboral formalizada.

f) De los ocho programas, siete suponen un subsidio monetario mensual a cambio de una contraprestación obligatoria la cual adquiere diferentes formas y se concretiza en diferentes espacios sociales.

g) Como políticas de transferencia de ingreso podemos señalar que: los montos son inferiores a la canasta básica de alimentos; por los criterios de selectividad definidos excluye de la percepción de los beneficios a muchos hogares pobres que no cumplen con los requisitos definidos; la incidencia en la reversión de la pobreza por ingreso es nulo y no contempla como criterio de definición del monto del subsidio la cantidad de miembros del hogar, con lo cual en la práctica adquiere un carácter más regresivo a las familias con más necesidades por ser más numerosas.

h) El monto deprimido y congelado de los subsidios hace que los programas en la dinámica del mercado de trabajo no participen como un desincentivo a la venta de la

fuerza de trabajo en las condiciones existentes de flexibilización y desregulación para los intereses de los sectores trabajadores.

i) Atendiendo a la condición de programas de empleo incentiva el empleo no registrado y precario (concretándose a través de las contraprestaciones laborales), participando en los procesos de fragmentación de la población ocupada.

j) En relación a los microemprendimientos, presentan un carácter marginal, en su mayoría apuntan a una comercialización en el mercado local, con grandes dificultades para lograr niveles de competitividad en la lógica que impone el mercado.

Los distintos planes sociales involucran los siguientes beneficiarios:

Distribución de beneficiarios según Planes Sociales de empleo desde su implementación a la fecha¹¹.

PLANES SOCIALES	Dic. 2000	Dic. 2001	Dic 2002	Dic. 2003	Agosto 2004	Dic. 2006	Enero 2007
PJyJD			3043	2838	2571	1454	1052
PEC			231	344	330	400	s/d
PROMET			121	124	140	141	130
SECOM		283	116	114	232	137	130
BONUS	165				7	s/d	s/d
BARRIOS BONAERENSES		203	205	94	110	52**	s/d
SEGUNDA OPORTUNIDAD	2	12			3	s/d	s/d
MANOS A LA OBRA							139***
TOTAL	167	498	3716	3514	3393	2184	1451

** dato a junio 2006

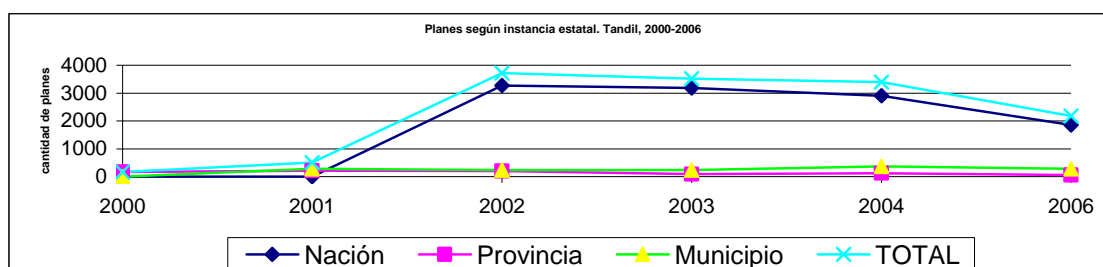
*** cantidad de personas involucradas, de las cuales 23 son personas con Plan Jefes y Jefas de Hogar, y el resto desocupadas o subocupadas. El dato corresponde a las tres etapas del plan hasta el momento.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Área de Empleo de la Municipalidad de Tandil.

Si agrupamos los distintos planes sociales vigentes a enero de 2007¹² de acuerdo a la instancia estatal de la cual dependen considerando el año de inicio de implementación en el partido de Tandil, tenemos la siguiente distribución:

¹¹ Quedan fuera del análisis los planes sociales controlados por organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que no pasan por el municipio sino que dependen directamente de instancias provinciales o nacionales.

¹² No consideramos en la serie los planes de empleo que a la fecha no tienen vigencia. Para los planes desafectados no se poseen datos.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Área de Empleo de la Municipalidad de Tandil.

Para diciembre del año 2001, momento excluyente de la crisis social en nuestro país, el Municipio ha desarrollado planes de empleo municipales, los cuales superan en número a los provinciales que se mantienen vigentes. Para el año siguiente el peso excluyente es de los planes sociales nacionales: el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados representa ahora casi el 90% de los planes en existencia bajo control del Municipio. Este excluyente peso relativo se mantiene en los años siguientes hasta la actualidad, pero se puede apreciar en el gráfico un descenso progresivo en el volumen absoluto de los planes sociales nacionales en Tandil desde el mismo año de su implementación, 2002. Esta caída no es reemplazada en la experiencia local por el aumento absoluto de los planes sociales con origen municipal.

Para enero del 2007 se ha podido reconstruir como se distribuyen los planes sociales vigentes:

	Plan Jefes/as		PROMET		SECOM	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
OSC	184	17,5	23	17,7	30	23,1
Estatales no municipales	71	6,7	7	5,4	2	1,5
Estatales municipales	477	45,3	100	76,9	98	75,4
Contraprestación educativa	320	30,4				
TOTAL	1052	100	130	100	130	100

Nota: no se considera el Plan Barrios Bonaerenses porque el registro no pasa por el municipio sino que es manejado directamente por las organizaciones.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Área de Empleo de la Municipalidad de Tandil.

Esta distribución nos muestra el fuerte peso que tiene el Estado municipal como conjunto de áreas y dependencias receptoras de beneficiarios de los planes sociales: 45,3% de los planes jefes/as de hogar desocupados, un 76,9 de los Promet y un 75,4 de los Secom. La mayoría de los(as) beneficiarios(as) de los planes PROMET y SECOM que trabajan en el Estado Municipal lo hacen en la Dirección de Desarrollo

Social en sus diferentes áreas y proyectos. Un 32% de los beneficiarios de PROMET en esta situación reciben un monto adicional sobre lo correspondiente al plan.

En segundo término, se puede indicar que es importante la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la recepción de beneficiarios/as de planes sociales: 17,7%, 17,5% y 23,1% de los planes jefes/as, Promet y Secom, respectivamente. También es significativo que el 30,4% de los planes jefes/as se encuentren bajo la modalidad de la contraprestación educativa. Los 320 beneficiarios/as del plan en esta situación significan el 24,3% del total de planes (Plan Jefes y jefas, PROMET y SECOM), cuando para principios del 2004, sobre un relevamiento de 3227 beneficiarios, el 7% se encontraba en esta situación¹³.

4- LA TRAMA ASOCIATIVA LOCAL: EL UNIVERSO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

En los últimos años, se han multiplicado, se han hecho visibles y se han densificado las acciones de las organizaciones de la sociedad civil (en adelante OSC), junto con las transformaciones generales del Estado y sus procesos de intervención social. En este contexto se producen profundos cambios en torno a los procesos de integración social y satisfacción de las necesidades de la población. En función de la constitución de este universo organizacional y las complejas y cambiantes relaciones con el Estado, se configura un mosaico diversificado de problemas e intervenciones sociales.

En este marco, ha prevalecido, tanto en el debate y producción académica como en las propuestas de intervención social del Estado, una concepción que ha tendido a idealizar las OSC¹⁴. En forma general, se puede decir que se consolida una visión liberal de la sociedad civil (...); consolidándose una cosmovisión que la coloca en oposición al Estado. Se construye una dicotomía entre Estado y sociedad civil, configurándose un consenso basado en la “satanización” del Estado. De esta manera el Estado empieza a ser depositario de un conjunto de características negativas (corrupto, ineficiente,

¹³ Datos aportados por el Área de Empleo el Municipio.

¹⁴ No pretendemos aquí abordar el debate sobre la noción y el uso del término sociedad civil en América Latina, sino resaltar su dimensión histórica, contextualizándolo en el marco del desarrollo del neoliberalismo. Al respecto expresa Juan Carlos Portantiero, “como ha sido ya señalado las tendencias vigentes hacia el reforzamiento de la sociedad civil en nuestro continente se vinculan directamente con la reestructuración de la economía y con la modificación substancial de los roles del Estado en términos de su dimensión, de las formas de su intervención, de la relación con los distintos actores sociales. Efectivamente, la modificación en curso de las relaciones entre Estado y economía tiende a robustecer el peso de la sociedad civil, a otorgarle mayores responsabilidades tanto en la realidad como en el imaginario social.” (J. C.: Portantiero, “Estado y sociedad civil en América Latina II. Ciudadanía, Instituciones y Estado de Derecho”, en Portantiero J.C: *El tiempo de la política. Construcción de mayorías en la evolución de la democracia argentina, 1983-2000*. Buenos Aires, Temas Grupo Editorial, 2000; pág. 23.)

clientelar, burocrático, rígido, etc.) en contraposición a una caracterización valorativa idealizada positivamente para la sociedad civil (transparente, eficiente, dinámica, flexible, creativa, etc.). Se construyeron explicaciones que autonomizan esta esfera, anteponiéndola al Estado y al mercado y subrayando la capacidad organizativa autogestiva de la sociedad civil. El campo de la sociedad civil aparece por sí mismo, como un espacio ejemplar¹⁵.

En el presente trabajo nos diferenciamos de aquellas concepciones abstractas y dicotómicas. La sociedad civil expresa “una esfera organizada de la vida social en la que actores colectivos expresan, dentro de un marco legal, intereses y valores y efectúan demandas al Estado, definidas éstas como fines públicos. Difiere así de la familia, de la empresa y también de la sociedad tout court, en la medida en que está integrada por colectivos autoorganizados”¹⁶. En efecto, en esta parte del trabajo nos interesa romper esa “idealización” y caracterizar concretamente el universo de OSC en el estudio de caso definido.

La sociedad civil representa un universo heterogéneo de organizaciones, que abordan una diversidad de temáticas, con formatos institucionales, fundamentos, objetivos, procedimientos, pertenencias e intereses diferentes. En este sentido, constituye un campo de la esfera pública no estatal, compuesto por una gama de actores y formas de organización con determinadas visiones sociales y formas de acción social¹⁷. De esta manera, en términos generales podemos señalar que con la amplitud de la denominación “organizaciones de la sociedad civil” estamos considerando un universo muy extenso y heterogéneo de instituciones sociales no gubernamentales dirigidas a dar respuestas por medio de bienes y servicios a diferentes demandas y necesidades sociales, las cuales se orientan hacia la concreción del denominado “bien común”. Al mismo tiempo al considerar la heterogeneidad del universo de OSC, las cuales no

¹⁵ El uso impulsado por el neoliberalismo, “... la sociedad civil es vista en contradicción y oposición al Estado. Esta concepción dicotomiza brutalmente a las dos esferas y plantea la necesidad de un predominio de la sociedad civil entendida como constelación de intereses privados, cuyo paradigma de libertad, creatividad y flexibilidad es la empresa capitalista. Frente al ogro burocrático del Estado, la sociedad civil libre deviene, en esta concepción, sociedad de mercado, esto es, en sociedad de consumidores más que en sociedad de ciudadanos.” (Portantiero, *ibídem.*)

¹⁶ J.C. Portantiero, *Ibídem*, p. 22.

¹⁷ El uso de esta denominación se hace extensivo a las denominadas ong's (organizaciones no gubernamentales) los clubes sociales, los emprendimientos comunitarios, los sindicatos, las cámaras empresariales, las iglesias, los centros culturales y/o educativos, las bibliotecas, las sociedades de fomento, las peñas o centros tradicionalistas, los grupos de autoayuda, las ligas /redes /foros /multisectoriales, las colectividades, los colegios profesionales.

poseen objetivos comunes, ni lógicas de funcionamiento similares, ni prácticas sociales únicas, entendemos que no puede ser calificado como un actor único con una sola perspectiva; por el contrario, la dinámica de este universo expresa las diferencias sociales y culturales, así como la complejidad de intereses existentes históricamente en la sociedad.

Las transformaciones socioeconómicas generales de la ciudad de las últimas dos décadas, señaladas en la primera parte del trabajo, impactan en las condiciones de vida de los sectores trabajadores, manifestándose en “múltiples problemas”. En este contexto surgen muchas organizaciones sociales intentando dar respuestas a esos problemas emergentes, al mismo tiempo que otras organizaciones sociales con una trayectoria histórica más extensa, incorporan también en sus estrategias de acción, distintas actividades frente a la emergencia hasta ahora no contempladas en sus repertorios de acción.

Los estudios que hemos realizado en Tandil indican un universo significativo de OSC. Los datos que arroja el I Censo de OSC nos indica la existencia de 3,52 OSC por cada mil habitantes incluyendo al grupo de cooperadoras escolares y 2,38 OSC por cada mil habitantes excluyendo del cálculo a las cooperadoras escolares. Esto la coloca por encima de Argentina que cuenta con 2, 28 organizaciones cada mil habitantes.

Para el año 2003, en el universo de OSC de Tandil predominan las organizaciones que hemos denominado “islas”, es decir aquellas que no dependen de otra organización y que no tienen organizaciones a su cargo. En segundo lugar, sobresalen aquellas organizaciones que dependen de una casa matriz ubicada fuera de la ciudad de Tandil. Esto nos brinda un panorama general sobre el tipo de organizaciones que con mayor predominancia existen en la ciudad y nos acerca al conocimiento de las relaciones que las organizaciones construyen en los procesos de institucionalización que quedan cristalizados en sus propias estructuras. Este rasgo predominante junto con la baja participación de las organizaciones a principios de la década del dos mil en espacios y mecanismos permanentes de articulación -redes o foros- (el 82 % de las organizaciones declara no participar en este tipo de estrategias de articulación) nos señala la existencia de una matriz institucional local fragmentada, lo cual marca cierta debilidad política en términos de construcción de demandas públicas y en la participación de definición de políticas locales. Se manifiesta un rol más adaptativo que confrontativo.

En relación a la situación jurídica de las organizaciones podemos indicar el elevado número de organizaciones que poseen personería jurídica (el 75%); si a esto le sumamos el número de organizaciones que tiene en trámite la personería jurídica (5,5%) y el número de aquellas que utilizan transitoriamente la personería jurídica de otra organización (4% sobre el total de organizaciones) nos da un total de 84,5% de las organizaciones que se encuentran reguladas, de alguna manera, por un marco normativo. Esto resulta significativo desde el punto de vista de la legitimación de las propias organizaciones en el escenario social. Y da cuenta además de cómo las iniciativas de personas particulares que surgen del campo público no estatal, se van normatizando, adquiriendo un estatuto legal acorde a la legislación existente. Entendemos que esto se debe en gran parte a que los organismos financiadores (públicos y privados) tienen entre sus exigencias este aspecto legal, con lo cual muchas organizaciones se han visto obligadas a la tramitación de la personería jurídica de modo tal de mejorar sus condiciones formales para la solicitud de fondos para su mantenimiento¹⁸.

La dimensión de análisis histórica, nos revela los procesos de creación e institucionalización de las organizaciones en relación con los contextos históricos en los cuales surgieron. El primer rasgo a destacar en este sentido se relaciona con el proceso mismo de construcción del universo de organizaciones de la sociedad civil, cuyos orígenes se ubican a fines del siglo XIX y principios del XX, incrementándose significativamente en las décadas del 30 y del 40 y aún más en el período posperonista (1955-1976). En éste último período se duplica la cantidad absoluta de organizaciones surgidas con anterioridad (surgen 56 organizaciones que representan un 22% del total relevado). Durante la última dictadura militar (1976-1982) se desacelera el ritmo de crecimiento de las organizaciones, para cobrar recién renovado impulso en el período que va desde la apertura democrática hasta nuestros días donde surgieron cerca del 50% del total de organizaciones.

¹⁸ Por otra parte, este conocimiento sobre la situación jurídica de las organizaciones produce una ruptura con el pensamiento común (sentido común) que considera que las organizaciones de la sociedad civil en su mayoría no cuentan con personería jurídica, sobre todo aquellas que surgen en períodos de crisis o para atender situaciones puntuales. Los resultados muestran que, aún siendo esto cierto, las organizaciones no sólo buscan rápidamente institucionalizarse como parte de un proceso de integración a la trama social sino que también, en algunos casos, generan procesos que les otorgan sentido social más allá de las circunstancias que le dieron origen; es decir algunas sufren transformaciones en relación a sus objetivos fundacionales y amplían sus horizontes de intervención.

En tal sentido, en este trabajo pudimos constatar que desde fines de la década del ochenta hasta el dos mil dos se registra un significativo dinamismo en la conformación de OSC, representando el 36 % sobre el total de organizaciones. En los años hiperinflacionarios de 1989 y 1990 se crearon en términos absolutos 18 organizaciones, entre 1991 y 1995 30 organizaciones, en el segundo quinquenio del noventa 28, y los primeros años de la década del 2000, 15 organizaciones. Esto se relaciona por un lado con los procesos de disposición y generación de espacios colectivos durante la década del ochenta constituyéndose una multiplicidad de organizaciones sociales; y al mismo tiempo, con la necesidad de dar respuestas colectivas a las necesidades sociales básicas en un contexto de ajuste estructural. Bajo estas circunstancias, las instituciones que se construyen son de un carácter más asistencial, preocupadas en dar respuestas a demandas básicas insatisfechas de vastos sectores de la población. Esto refleja la construcción de iniciativas puntuales de la sociedad civil ante los procesos de profundización de la pobreza de los sectores históricamente relegados de los mecanismos de integración social, la extensión de los procesos de pauperización de las capas medias de la sociedad, junto con la retracción y ausencia estatal en materia de garantías sociales universales. En este contexto, se forman seis centros de jubilados ubicados en diferentes barrios de la ciudad; se define la red de instituciones dedicadas a la niñez en estrecha relación con la ejecución de la política de minoridad del gobierno de la Provincia de Buenos Aires; continúa el proceso de construcción de sociedades de fomento, pugnando por el mejoramiento de las condiciones de vida urbanas de los pobladores de barrios periféricos e incorporando en sus procesos de intervención propuestas recreativas y de “contención” de la crisis centralmente dirigidas a la infancia; se crean además los comedores y merenderos populares, articulados también a diferentes planes y programas estatales de diferentes niveles gubernamentales o simplemente a contribuciones estatales puntuales.

Por otra parte, es posible ver que el origen de las organizaciones en su mayoría remite a inspiraciones laicas. Sin embargo, esto no implica de ningún modo negar las influencias religiosas (centralmente católica) en la estructuración de un conjunto de organizaciones dedicadas a la atención social.

A lo largo del trabajo le hemos dedicado un esfuerzo importante a conocer el proceso de Organización interna y el accionar de la organización, para lo cual, tal como hemos desarrollado anteriormente, definimos un conjunto de aspectos a indagar.

La noción de *identidad* comprende al conjunto de características y principios fundamentales que definen y constituyen la razón de ser de una organización. Estos rasgos son los que le otorgan singularidad y posibilitan su diferenciación en el interior del universo organizacional. Desde una perspectiva histórica y dinámica, la noción de *identidad* de una organización se encuentra estrechamente vinculada a la función social que desempeña, a las prácticas que desarrolla, quiénes la desarrollan, con quiénes, con qué fines, cómo. La noción de identidad hace referencia al mundo interno de la organización y a la manera de relacionarse en el contexto histórico en el que se desarrolla. Esto responde al grado de complejidad que tal noción adquiere en un contexto histórico determinado. En el contexto de la década del noventa y los primeros años del dos mil, predomina la constitución de organizaciones cuya motivación obedeció centralmente en intentar responder colectivamente a problemáticas vinculadas a las múltiples situaciones de desprotección social.

En lo que respecta a la organización interna de las organizaciones y teniendo en cuenta sus objetivos principales, encontramos que predominan los objetivos de asistencia o servicio; en segundo lugar se destacan objetivos relacionados a la promoción y al desarrollo; en tercer lugar, objetivos relacionados a procesos de reclamo o reivindicación siendo el Estado el principal actor de interpelación; y en cuarto lugar, objetivos de autoayuda o contención. Esto marca la predominancia de organizaciones preocupadas en la emergencia y subsistencia en un contexto de crisis estructural.

En relación con lo anterior también pudimos establecer el alcance y la zona en que las organizaciones desarrollan su accionar. En líneas generales, podemos decir que predominan las organizaciones cuyo accionar no trasciende los límites de lo local municipal. Dentro de esta mayoría, existe un grupo minoritario de organizaciones que no particularizan su accionar en una zona específica del Municipio y otro cuantitativamente más significativo que delimita su accionar territorialmente, cuyo alcance no supera el espacio barrial. Es decir, para estas organizaciones el barrio se constituye como ámbito principal de su accionar. Esto se vincula principalmente con las organizaciones de carácter socio-asistenciales.

Para conocer quién es la población destinataria, es decir la población hacia la cual las organizaciones dirigen sus acciones, se construyeron una serie de perfiles básicos. A partir de esto se obtuvo como resultado que las organizaciones dirigen su accionar a grupos poblacionales definidos, en orden de importancia, según los siguientes perfiles: indicadores socioeconómicos, problemática social, sector económico, intereses y/o temáticas recreativas y/o deportivas, base territorial, identidad religiosa, identidad étnica y/o cultural, interés cultural y/o educativo, comunidad en general, grupo étnico. Además, mayoritariamente las organizaciones no trabajan con un solo grupo étnico sino que dirigen sus acciones a sectores de diferentes edades; lo mismo ocurre con relación al sexo, predominan las organizaciones que trabajan tanto con hombres como con mujeres¹⁹.

Otro dato interesante surge al observar el área temática de trabajo de las organizaciones, las 6 más significativas son: recreación/deporte/sociabilidad; educación; salud; arte/cultura; trabajo/producción y alimentación.

En relación con lo anterior surge también del análisis de los datos construidos que el principal modo de accionar de las organizaciones remite a brindar diversos servicios sociales²⁰. En segundo lugar, se encuentran las acciones de asesoramiento, asistencia técnica y capacitación. En tercer lugar, se ubican las acciones de asistencia directa (sólo la entrega de recursos) y en cuarto lugar, las acciones guiadas por la defensa y reivindicación de derechos.

En lo que se refiere a la implementación de políticas de capacitación, los resultados obtenidos revelan que el 51% de las organizaciones no ha definido procesos de capacitación para sus miembros. En el 42 % restante, que sí lo ha hecho, se han identificado diferentes modalidades, según las características y necesidades que fueron identificando las organizaciones. Creemos que estos datos son relevantes ya que a partir de conocer si las organizaciones desarrollan o promueven políticas sistemáticas de capacitación, es posible visualizar si las mismas se plantean políticas para fortalecer

¹⁹ La definición de los sujetos con los cuales trabaja es un tema complejo, que no puede ser pensado en un vacío político-institucional. En algunas de ellas, aparece activa la categorización construida desde los planes y programas estatales con los cuales se relacionan para su implementación: “población vulnerable”, “pobres”, “menores”, “población en riesgo”, etc.

²⁰ Este aspecto es significativo en un contexto de mercantilización social y de retracción de la garantías universales de la Intervención social del Estado.

los recursos humanos existentes, lo cual redundará en un proceso de fortalecimiento organizacional, a partir de la reflexión y análisis de la propia práctica.

La problemática de los recursos de las organizaciones constituye un aspecto sensible de los procesos de construcción organizacional. En relación a los recursos financieros de las organizaciones, un porcentaje importante declara administrar un presupuesto considerando fuentes de ingresos propias y/o externas. Si bien las organizaciones construyen variadas estrategias de generación de ingresos propios (cuotas y actividades económicas y sociales propias), existe una participación importante de recursos externos en las organizaciones, centralmente del Estado en alguno de sus niveles gubernamentales. En relación a la situación sobre los recursos humanos, es significativa la movilización de personal voluntario (76,3% sobre el total de recursos humanos), es decir personas que desarrollan tareas permanentes en la organización sin percibir ninguna renta. En relación a las personas que perciben una renta, observamos la participación de situaciones precarias e inestables. En este universo ubicamos el porcentaje de “beneficiarios” del PJJHD que realizan la contraprestación en OSC.

Otra de las dimensiones abordadas en el censo apunta identificar las relaciones que las organizaciones construyen, establecen y mantienen entre sí y con otros actores del contexto social en el cual existen y se desarrollan.

En relación con la vinculación con el Estado, las principales conclusiones a las que arribamos nos indican que el 76% de las organizaciones se vincula con diferentes organismos estatales, de las cuales sólo un 6% lo hace en situaciones ocasionales. Esto marca una fuerte presencia del Estado como interlocutor en los procesos de construcción organizacional. Con relación a los motivos de vinculación los cuatro principales, señalados por las propias organizaciones en orden de importancia son: intercambio de servicios y recursos; trabajo y seguimiento conjunto; capacitación - asesoramiento y financiamiento. Observando las organizaciones creadas en el período comprendido entre 1989 y 2002, observamos una alta vinculación con el Estado en sus diferentes niveles gubernamentales a través de la implementación de diferentes políticas sociales focalizadas, constituyendo los núcleos duros: la política alimentaria, la política de minoridad, la política social dirigida a la tercera edad, la política cultural

(referida a las bibliotecas populares), la política laboral referida a la desocupación y subocupación.

Por otra parte, en lo que se refiere al trabajo asociativo y a las relaciones que las organizaciones pueden establecer entre sí mediante la participación en redes o foros, se constató, tal como señalamos anteriormente, la inexistencia de mecanismos estables de integración. Esto es, el 82% de las organizaciones no participa en ninguna red o foro; lo cual nos está indicando que no se han logrado constituir experiencias estables de articulación.

Otra de las dimensiones que nos planteamos conocer fue “la mirada de la organización” respecto de la realidad en el ámbito local, a través de la palabra de sus informantes clave. Buscamos responder a la siguiente pregunta: ¿qué lectura construye la organización de la realidad y de los problemas sobre los cuales interviene? Asimismo se intentó rescatar las evaluaciones que las organizaciones hacen de la política social local.

En relación con este último punto, las conclusiones extraídas arrojan una evaluación altamente negativa por parte de las organizaciones. Las tres cualidades de la política social local, en orden de importancia, son las siguientes: ineficaz, insuficiente, inexistente. Estos tres tipos de respuestas suman el 74% de las evaluaciones totales realizadas por las organizaciones. Esto señala una mala evaluación de la mayoría de las organizaciones hacia el municipio como actor central en el ámbito local, es decir, hay un cuestionamiento hacia sus políticas y prácticas instituidas en torno a la resolución de problemáticas y demandas sociales. Esto en un marco histórico general de crisis de representación tradicional de los gobiernos, partidos y otros actores colectivos.

En relación con lo anterior también buscamos conocer cómo “las organizaciones se miran a sí mismas” (autodiagnóstico), sobre todo en relación con las dificultades más relevantes que identifican para el cumplimiento de sus objetivos y para el desarrollo de su trabajo en general. Dentro de las dificultades identificadas por las organizaciones las más relevantes son: en primer lugar, ubican la escasez de recursos financieros; en segundo lugar, la insuficiencia de espacio físico para un adecuado funcionamiento; en tercer lugar, la insuficiencia de equipamiento; en cuarto lugar, identifican dificultades

relacionadas a recursos humanos y en quinto lugar, señalan la sobredemanda. Toda esta gama de dificultades expresan problemas estructurales que remiten centralmente a los recursos (humanos, materiales y financieros) que moviliza cada organización.

En esta dimensión que hemos definido de “Autodiagnóstico” también indagamos sobre el rol que las organizaciones creen estar cumpliendo en la sociedad y sobre el rol que creen deberían cumplir. La mayoría de las organizaciones consideran que están desempeñando un papel supletorio del Estado, de un Estado que ha estado ausente en la resolución de las principales problemáticas sociales emergentes en el contexto de crisis. Colocando la pregunta en términos del “deber ser”, de las aspiraciones en torno de las relaciones con el Estado, la mayoría responde desear establecer un trabajo complementario entre su propio accionar y el accionar del Estado. Es decir colocan al Estado como un actor central y fundamental en la garantía del bienestar de la población. Algunas organizaciones repiensen las políticas que implementan e intentan generar dentro de posibilidades establecidas, modificaciones en función de sus experiencias organizacionales.

5- CONSIDERACIONES FINALES: ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ECONOMÍA SOCIAL Y POLÍTICAS SOCIALES.

El análisis efectuado en la primera parte nos ha permitido realizar una caracterización de lo que sucede en las dimensiones establecidas en Tandil. Hemos mostrado diferentes procesos de transformación a través de la utilización de distintas fuentes. Principalmente la consolidación y persistencia durante la dos últimas décadas de niveles elevados de desocupación abierta, acentuándose diversos grados de precariedad e inestabilidad de las ocupaciones. Esto último observado en el creciente peso que asumen los puestos asalariados sin protección social, así como el volumen significativo de situaciones precarias en las ocupaciones por cuenta propia.

Respecto de la intervención social del Estado en el ámbito local-municipal a través de planes de empleo asociados a la desocupación, está integrada por una trama compleja de diferentes planes gubernamentales involucrando en su operatoria a diferentes dependencias estatales y diferentes actores sociales, lo cual da como resultado específicas relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Los planes desplegados apuntan marginalmente a la inserción regular en la empresa privada, los cuales adquieren cuantitativamente un carácter insignificante; a la constitución del autoempleo a través de

los microemprendimientos (componente que es revitalizado en la administración de Kirchner); al sostenimiento del ingreso asociado a la obligatoriedad de la contraprestación, asumiendo un carácter no remunerativo y transitorio.

El monto deprimido y congelado de los subsidios hace que los programas en la dinámica del mercado de trabajo no participen como un desincentivo a la venta de la fuerza de trabajo en las condiciones existentes de flexibilización y desregulación para los intereses de los sectores trabajadores. En la experiencia práctica los beneficiarios (centralmente los jefes varones) han combinado los subsidios con la búsqueda y realización de trabajos en el sector informal. En este sentido esta modalidad de programas incentivó al trabajo de carácter no registrado, con altos niveles de precariedad y baja calidad. El Estado lejos de estar ausente, participa promoviendo empleo transitorio, sin ningún tipo de cobertura previsional y social, formalizando institucionalmente múltiples condiciones de trabajo informal. La insuficiencia del monto monetario de los subsidios empuja a los beneficiarios y los integrantes de su familia a buscar los medios que permitan garantizar su reproducción y sostener su existencia, centralmente a través de la venta de su trabajo en el mercado informal. Esta presión se hizo cada vez más intensa por la caída del poder adquisitivo del monto de los subsidios. La situación objetiva de las inserciones precarias asociadas al congelamiento del monto del plan y la pérdida de la capacidad real de compra, implicó en la práctica la puerta de salida precarizada del plan²¹. En este sentido, no ha sido menor la participación del Estado en la generación de trabajo precario bajo la forma de contraprestación: una parte importante de los beneficiarios/as de planes sociales en el período ha sido incorporada en las distintas áreas del Estado con el fin sostener algunas de las obligaciones esenciales del mismo. Al mismo tiempo, la incorporación de beneficiarios/as en las OSC se realizó principalmente para el desarrollo de tareas sin calificación, y bajo la ausencia de políticas reales de formación. En relación a los microemprendimientos (Plan Manos a la Obra), presentan un carácter marginal, en su mayoría apuntan a una comercialización en el mercado local, con grandes dificultades para lograr niveles de competitividad en la lógica que impone el mercado.

Bajo este esquema de políticas de empleo, parece no revertirse la diferenciación instalada en el universo de los asalariados, los registrados y los no registrados, lo cual representa

²¹ En este sentido se está trabajando para dar cuenta del conjunto de las condiciones laborales de los empleos generados en el período.

disparidades en relación a las remuneraciones y a las condiciones de empleo. A pesar de la existencia de ciertos indicadores que dan cuenta de la reactivación económica en algunos sectores productivos en los últimos tres años, el perfil de las políticas predominantes participa en abonar esta diferenciación, consolidando la fragmentación del mercado de trabajo.

Tal como señalamos en el desarrollo del trabajo, resulta reduccionista a la luz de la experiencia analizada definir a la sociedad civil (y a las diversas OSC que la integran) en términos idealizados y abstractos. En tal sentido, resulta evidente del estudio que las organizaciones de la sociedad civil no constituyen una realidad unívoca sino una realidad heterogénea y compleja²², las cuales participan diferencialmente a partir de sus prácticas en la constitución, en términos amplios, de la economía social. Sin duda, las OSC tuvieron diferentes niveles de participación en la construcción de proyectos y servicios sociales, lo cual estuvo relacionado con los cambios en los contextos sociales, políticos y económicos. La extensión de esta trama asociativa no puede comprenderse sin la relación con el Estado y los procesos de Intervención Social que ha definido.

En el contexto histórico definido en las dos últimas décadas, las OSC, se han articulado a la política social residual expresada en diferentes planes y programas sociales gubernamentales. Es en esta trama compleja que es necesario repensar las relaciones Estado/Sociedad civil. La constatación empírica del estudio de caso nos muestra que la experiencia de las OSC en la actualidad se encuentra atravesada por los procesos de precarización, no logrando revertir con los procesos que desarrolla dichas tendencias generales.

Las políticas sociales estatales que se articulan para su ejecución con las OSC, propician formas de participación *restringidas delimitadas* a los marcos que el diseño de la política define. En este sentido las OSC, han sido espacios receptores de la aplicación de los lineamientos de los planes y programas que definen las políticas

²² Por esto, entendemos que la identidad de este mundo organizacional es múltiple, en relación a la naturaleza heterogénea que define el universo de organizaciones de la sociedad civil, las cuales no poseen objetivos comunes, ni razones de funcionamiento equivalentes, ni lógicas de acción únicas. Por tal motivo no puede ser homologado o simplificado como un actor único con una identidad definida; por el contrario, los procesos de constitución y desarrollo de este universo refleja las diferencias sociales y culturales, como así también la compleja participación de intereses presentes en la sociedad. Las visiones y prácticas que estas organizaciones fijan son resultados histórico-políticos de prácticas y relaciones sociales en las que se entrama y contribuye a tramar. En este sentido, estas organizaciones no permanecen en el vacío sino que su génesis y desarrollo responde a una constelación de fuerzas y alianzas sociales propias al contexto socio-histórico en que se mueven. Son parte y participan diferencialmente en la construcción de un determinado orden ético-político y cultural.

sociales. En tal sentido la invitación a la participación de las OSC, es centralmente de carácter instrumental, no abriéndose por parte del Estado canales de participación para la definición por parte de las organizaciones de políticas que definan un proyecto de sociedad.

La denominación de “economía social” ha dado lugar a múltiples interpretaciones sobre qué es lo que involucra. Partiendo de una perspectiva que presta especial atención a la situación histórico-social –también del surgimiento y consolidación de los conceptos utilizados para dar cuenta de una realidad cambiante-, y teniendo en cuenta que nuestra investigación se inscribe en una realidad específica –la Argentina de los años noventa y dos mil-, necesariamente debemos dar cuenta de la “economía social” en una época de crisis como la que nos ha mantenido en vilo y que subsiste para gran parte de la población de nuestro país.

Los sucesos de las últimas décadas en la región, en donde se pusieron en marcha reformas estructurales desde una perspectiva neoliberal, han tenido consecuencias muy serias respecto de las formas de organizar la sociedad, en todos sus aspectos, políticos, económicos y culturales. En nuestro país, una de las consecuencias buscadas y logradas respecto de la forma de organizar la sociedad ha sido el aumento del peso relativo del capitalismo de economía privada en desmedro del capitalismo de Estado, lo cual se logró a través de la privatización de distintas empresas de producción y de servicios que hasta comienzos de los años noventa pertenecían a la órbita estatal. Por su parte, la extensión de la pequeña producción para el mercado se realizó sobre la base del aumento acelerado de la pobreza, el proceso de pauperización y de precarización laboral. Es decir que se verifica un proceso general con dos caras: por un lado, la concentración y la centralización del capital, y por el otro la extensión de la pobreza hasta alcanzar a más del 50% de la población del país en el 2002. En este contexto de empobrecimiento acelerado de la población, la economía social se liga fuertemente al desarrollo de prácticas asociativas, cooperativas y solidarias para resolver las necesidades más inmediatas, alimentación en primer lugar.

Entendemos que la comprensión de la economía social no puede adecuarse a las distinciones tajantes como las que a menudo se quieren establecer entre el sector mercantil y el sector no mercantil. Difícilmente pueda conceptualizarse la realidad de las prácticas de economía social por fuera del mercado, cuando es el mercado el que

regula la sociedad. Por el contrario, lo que se puede verificar en el análisis de situaciones concretas es la combinación de recursos estatales a través de distintos tipos de subsidios, de ámbito no-estatal, como pueden ser las donaciones, y de recursos que se presentan como no-mercantiles, como puede ser la mano de obra voluntaria, que como vimos ocupa un lugar destacado en la práctica de las organizaciones sociales.

Otro elemento que es necesario remarcar y señalar con énfasis: la efectiva relación entre el Estado y la “sociedad civil”. No resulta posible analizar el universo de organizaciones de la sociedad civil sin considerar la dimensión estatal que, en general, es desde donde se brindan los marcos generales que regulan la práctica de las organizaciones sociales. Más que nunca se hace necesario superar la dicotomía de Estado/sociedad civil a través de la utilización de conceptos, o de su creación, que permitan dar cuenta del elemento material que tienen las concretizaciones analizadas.

Por último, también resulta claro que las prácticas llevadas adelante por las organizaciones de la sociedad civil se encuentran predominantemente regidas por la inmediatez de la experiencia, que en el período analizado tiene un perfil signado brutalmente por las necesidades materiales más apremiantes. Las prácticas de economía social en este marco resultan positivas en la medida que refieren a colectivos que “autogestionan” productos y servicios –y las comillas se colocan en el afán de relativizar estas prácticas de acuerdo con lo que afirmamos más arriba respecto de la vinculación con el Estado-. Y han permitido en muchos casos desarrollar un proceso de socialización basado en la solidaridad y la cooperación que de alguna manera los pone por “fuera” de la lógica dominante en el sistema capitalista. Por otro lado, y tal vez por esta característica mencionada, se trata en general de prácticas ligadas en forma exclusiva a resolver la inmediatez de la necesidad, definidas así desde las políticas públicas que le otorgan a este universo límites precisos de desarrollo –o de subdesarrollo-, porque se tensionan con el rumbo dominante.

Bibliografía:

Abramovich Ana Luz y Alberto Federico Sabaté: “Condiciones económicas que justifican el impulso de una estrategia de Economía Social y Solidaria en el caso

argentino”, en Andrenacci (comp) *Problemas de política social en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires, UNGS/Prometeo Libros Editorial, 2006.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): *América Latina frente a la desigualdad. Progreso Económico y Social en América Latina, Informe 1998-1999, Washington D.C, 1998.*

Defourny Jacques: “La larga marcha del concepto de economía social”, en Vuotto Mirta (comp.) *Economía social. Precisiones conceptuales y algunas experiencias históricas*. Buenos Aires, Fundación OSDE/ Editorial Altamira, 2003.

Fernández Soto Silvia: “Estado y organizaciones de la sociedad civil: intervenciones en relación a la pobreza. Un estudio de caso en una ciudad intermedia del interior de la provincia de Buenos Aires”, Coloquio internacional *Los Procesos De Co-Construcción De Las Políticas Sociales: Economía social, lucha contra la pobreza y políticas de empleo*. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, diciembre de 2006.

Fernández Soto Silvia, Tripliana Jorge y Rodríguez Paula: “Caracterización y tendencias de la población trabajadora: precarización, desocupación y planes de empleo. El caso de la ciudad de Tandil en las décadas de 1990 y 2000”. 8° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Agosto 2007. ISBN 978-987-98870-3-5.

Hintze Susana: *Políticas Sociales argentinas en el cambio de siglo. Conjeturas sobre lo posible*. Buenos Aires, Editorial Espacio. 2007.

Lévesque Benoto y Margueritte Mendell: “La economía social en Québec: elementos teóricos y empíricos para el debate y la investigación”, en Vuotto Mirta (comp.) *Economía social. Precisiones conceptuales y algunas experiencias históricas*. Buenos Aires, Fundación OSDE/ Editorial Altamira, 2003.

Portantiero Juan Carlos “Estado y sociedad civil en América Latina II. Ciudadanía, Instituciones y Estado de Derecho”, en Portantiero J.C: *El tiempo de la política. Construcción de mayorías en la evolución de la democracia argentina, 1983-2000*. Buenos Aires, Temas Grupo Editorial, 2000.

Tripliana Jorge. El capitalismo en el campo. Aproximación a la medición de las fuerzas productivas y los grupos sociales a partir de datos censales. El partido de Tandil, 1937-

1988. Tesis de Maestría en Investigación en Ciencias en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2004. mimeo.

Fuentes utilizadas:

Boletín de la UNCPBA, N° 9, 2003.

Censo Nacional de Población y Vivienda. 1980, 1991, 2001. INDEC.

Censo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Tandil. 2003, 2008.
PROIEPS/UNCPBA-FORO SOCIAL TANDIL.

Encuesta de Hogares y Empleo. Dirección de Estadística de la Provincia de Buenos Aires, 2005, 2006.